

INFORME DE ACTIVIDADES ASESORIA H. SENADOR FIDEL ESPINOZA, diciembre de 2023

I. Generalidades:

En el marco de la asesoría parlamentaria, por encargo del Honorable Senador Fidel Espinoza durante el periodo que comprende desde el 01 de diciembre al 18 de diciembre de 2023, he realizado las siguientes actividades e informes:

1. Asistencia de manera presencial en las sedes del Congreso Nacional de Valparaíso y Santiago, a las Comisiones: Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Educación y Vivienda y Urbanismo (según anexo adjuntado).
2. Reuniones de coordinación y balance legislativa con el Senador, los días martes y miércoles de cada semana legislativa.
3. Elaboración de informes en derecho.

I-

I Boletín N° 14.251-14

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Castro, señora Aravena, y señor Chahuán, que sanciona a funcionarios y profesionales encargados de la fiscalización de obras públicas que incumplan sus responsabilidades.

Análisis del proyecto

El proyecto de ley señala que por diferentes causas en especial por errores administrativos y falta de una adecuada fiscalización las obras públicas (que no define) pero dado el tenor de la iniciativa pareciera referirse a aquellos proyectos que cuentan con financiamiento estatal, sufren retrasos o daños que implican un mayor costo y tiempo. Es importante tener presente que ya en la normativa MOP se define el concepto de obra pública.

Por otro lado, indica que no hay una adecuada regulación respecto de la responsabilidad de los funcionarios, tanto de quienes participan en el diseño conceptual, estudios de prefactibilidad, de factibilidad como de aquellos que los ejecutan o supervisan. En razón de lo anterior agrega un artículo 15 bis, en la LGUC

Se habla de un registro de sanciones a funcionarios y profesionales que estaría a cargo del MOP y se establece que el profesional con más de 3 anotaciones no puede trabajar en ningún proyecto de obra pública para el Estado y tampoco ser proveedor del Estado conforme a la ley de Compras Públicas.

Respecto de lo anterior hay que hacer presente que si bien es cierto lo señalado por los autores del proyecto en cuanto a que evidentemente deben existir responsables por las fallas en las obras; no es efectivo que desde el punto de vista normativo no exista regulación, por cuanto los funcionarios públicos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal y otros actores privados que intervienen en las obras también tienen este tipo de responsabilidades, así por ejemplo el artículo 18 de la LGUC regula la responsabilidad civil por la calidad de la construcción; la ley 20.703 crea el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obras que participan en la construcción conforme a los artículos 142 y 143 de la misma ley y la ley 20071 crea el Registro de Revisores Independientes de Obras de Edificación. Por otro lado, existen reglamentos de contratación de obras en el MINVU como el DS 236 (V. y U.), el registro de consultores que regula el DS. 135 (V. y U.), de 1978, entre otros.

La inhabilidad a perpetuidad, que propone el proyecto de ley resulta ser una sanción desproporcionada para funcionarios públicos de carrera, provocando un desincentivo para los funcionarios públicos que desempeñan la labor de fiscalizar.

Leyes que se propone modificar con el Boletín N° 14.251-14 y las materias que regula en relación a la propuesta en estudio:

Leyes modificadas por la propuesta	LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES	LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS
Donde aplica	Regula las responsabilidades de los Directores de Obras Municipales, en tanto funcionarios públicos y en relaciones a las funciones propias del cargo.	Regula los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones.
	Regula las responsabilidades de los profesionales que participan en el proceso de construcción de cualquier obra (pública o privada).	Administra el Registro de Contratistas de la administración.
	No regula las responsabilidades de otros funcionarios públicos en sus	No regula las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los

	responsabilidades relacionadas con sus tareas.	procesos administrativos
--	--	-----------------------------

**Regulaciones consideradas en el proyecto de ley Boletín N° 14.251-14
en el texto del proyecto.**

Artículo	Propuesta	Consideraciones
Artículo bis 15 nuevo LGUC	Establecer la responsabilidad de los inspectores técnico de la obra.	<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 18 inciso 5° establece la responsabilidad de los ITO¹ y regula las condiciones del registro la Ley 20.703² • Las responsabilidades de este profesional solo están relacionadas con la ejecución de la obra.
Artículo 18° LGUC	Precisa la sanción al ITO y la información al registro	Ley 20703 contempla sanciones administrativas, complementarias a las sanciones civiles o penales que se

¹ Artículo 18 inciso 5° y 6° LGUC: “El inspector técnico de obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural y su memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes.

Respecto de las responsabilidades, daños y perjuicios a que se refiere este artículo, las personas jurídicas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, los que deberán individualizarse en el respectivo permiso de construcción.”

Disponible en <https://bcn.cl/2f7k6> (diciembre 2023)

² Ley 20793. Disponible en <https://bcn.cl/2l0t9> (diciembre 2023)

		determinen. Cabe considerar que es una responsabilidad solidaria con el resto de los profesionales responsables de una obra.
Artículo 22° LGUC	Propone establecer un registro de funcionarios sancionados, administrado por el Ministerio de Obras Publicas	La LGUC solo aplica respecto de las exigencias de las obras de edificación o urbanización, y no sobre otras responsabilidades funcionarias
Artículo 26° LGUC	Propone un registro de funcionarios y profesionales sancionados en procesos judiciales y administrativos por incumplimientos de la LGUC	La administración de un registro de esta naturaleza no está relacionada con las obligaciones actualmente establecidas del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Ya existe registros de contratistas y de profesionales según especialidad, en el MINVU.
Artículo 4 inciso primero	Propone excluir a los sancionados del registro	No aborda la proporcionalidad de las penas ni la doble sanción

Ley 19.886		que esto podría representar.
-----------------------	--	---------------------------------

II.- Proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas.

Boletín N° 15.895-04.

Estado: Primer Trámite Constitucional

Autores: Sanhueza, Aravena, Provoste, Espinoza y García.

Objetivo del proyecto.

La iniciativa tiene como propósito concientizar, desde una edad temprana a los estudiantes, sobre los efectos jurídicos y sociales de los delitos y las nocivas consecuencias del consumo de drogas y demás sustancias ilícitas. El proyecto genera la obligación de que todo establecimiento cuente con una política para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas. La política debe ser puesta a disposición de toda la comunidad educativa (El sostenedor, el Consejo Escolar y el Comité de Buena Convivencia Escolar). La necesidad de capacitar al cuerpo docente y a toda la comunidad educativa, así como la incorporación curricular de los efectos y consecuencias del consumo y tráfico de drogas, así como de otras conductas delictuales o de violencia. La presente reforma a la ley general de educación comenzará a tener efectos el año académico siguiente a la publicación de la ley.

Fundamentos.

La sana convivencia democrática ha sufrido un menoscabo el último tiempo por actos delictuales y por un incremento en el consumo de drogas en edades tempranas.

Resulta relevante que el Estado tenga un rol activo en materia de concientización y educación, dirigida con especial enfoque a las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de que desde temprana edad conozcan

las consecuencias del actuar delictual y de los nefastos efectos del consumo de drogas.

De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros de Chile que informó que, dentro de las detenciones de adolescentes, estaría aumentando la proporción de delitos asociados al uso de armas, de un 4% en 2018 a un 7% en mayo de 2022. Asimismo, entre 2021 y mayo de 2022, ha aumentado la proporción de delitos de alta connotación pública y delitos violentos. Cabe destacar que, con este aumento, dichas cifras vuelven a las mismas proporciones registradas en 2019, generando un alza importante en el delito de lesiones leves (de un 13,5% a un 30,5% desde 2019 a la actualidad).

En cuanto al consumo de drogas, resulta dramático lo señalado por el SENDA en 2022: "Según la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030 de SENDA, se evidenció que el consumo de drogas en los jóvenes chilenos se encuentra hoy en niveles muy altos, superando incluso el consumo de los adultos, salvo en el caso del alcohol. Así, los estudios en población general y en población escolar de SENDA indican que el consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, es mayor en los estudiantes entre 8o básico y 4o medio que en el resto de la población.

Zaida
Lara

Firma asesora.